

El asesinato, hace 40 años, de Juan María de Araluze a manos de ETA marcó el comienzo de un éxodo en el País Vasco del que nadie habla hoy

AQUEL LUNES NEGRO DE 1976

GORKA ANGULO ALTUBE

TRIBUNA

El lunes 4 de octubre de 1976, un comando de ETA-m, adiestrado en la academia de la policía argelina en Souma, asesinó en San Sebastián al presidente de la Diputación de Guipúzcoa, Juan María de Araluze, su conductor José María Elicegui y los tres policías de escolta Alfredo García González, Antonio Palomo Pérez y Luis Francisco Sanz Flores. Fue uno de los atentados más sangrientos de los años de plomo. Araluze, presidente de Diputación, procurador en Cortes y consejero del Reino, era el cargo público del Movimiento más destacado del País Vasco y Navarra. Notario desde 1947, once años antes sus ideas carlistas le llevaron a alistarse en el Requeté durante la Guerra Civil. Representaba a un carlo-franquismo que tomaba posiciones, a la muerte del dictador, desde las filas de Unión Nacional Española (UNE), una de las asociaciones que formarían Alianza Popular (AP) en 1976. Araluze continuaba al frente de la corporación provincial porque se lo había pedido el Rey. Llegó al Palacio de la Diputación en 1968 con el objetivo de recuperar el sistema concertado y las instituciones forales suprimidas por Franco en 1937 en Vizcaya y Guipúzcoa.

El mismo objetivo que uno de sus predecesores, Fernando Aramburu Olarán, o de los vizcaínos Javier de Ybarra y Augusto Unceta-Barrenechea. ETA asesinó a todos menos a Fernando Aramburu, desterrado en 1978 por amenazas de la banda. Araluze lideró desde la diputación guipuzcoana a un grupo de alcaldes y diputados que terminarían casi todos en las filas de Guipúzcoa Unida, la marca de Alianza Popular en las elecciones de 1977. También terminarían casi todos amenazados, varios exiliados, uno asesinado y otro que se salvó en dos ocasiones por error de sus verdugos. Tres de ellos, que ocultaron su condición de nacionalistas hasta la muerte del dictador, no tuvieron ningún problema. Es un ejemplo más de cómo algunas personas que participaron en las instituciones locales vascas durante el franquismo y se identificaron posteriormente con el nacionalismo, nunca tuvieron problemas con ETA, nadie les llamó franquistas ni tampoco les recordaron su pasado. A otros, identificados con Alianza Popular o UCD, les amenazaron, persiguieron, insultaron e incluso asesinaron justificando estos crímenes con alusiones a su pasado.

La esquizofrenia paranoide con el franquismo en el País Vasco llevó a que terroristas de ETA, hijos o nietos de franquistas, decidieran asesinar a cargos públicos del régimen cuando Franco ya había muerto. Quizá esos pistoleros lo tendrían que haber arreglado primero en su casa: aceptando que la Guerra Civil fue una contienda entre vascos, y no entre

vascos y españoles; que hubo una parte de la sociedad vasca, en la que estaban sus padres, tíos o abuelos, que luchó a favor de Franco y legitimó su régimen en las provincias vascas y Navarra. Pero eso era inaceptable porque rompía su discurso sobre la guerra entre españoles y vascos, sobre la invasión de Euzkadi, el franquismo disfrazado de democracia y otros delirios parecidos para justificar sus asesinatos en serie. ¿Por qué no empezaron enfrentándose a sus padres y abuelos franquistas, si tanto odiaban a los que pensaban como ellos? ¿Por qué no se plantearon hacer con sus familiares lo que hicieron con otros que pensaban igual, por ser franquistas o carlistas, por haber combatido en el Requeté, por rechazar la ikurriña o por no haberles transmitido el euskera? Preguntas sin respuestas 40 años después.

Los que sí supieron responder siempre fueron la mujer y los nueve hijos del político asesinado: nunca odiaron a los asesinos del cabeza de familia. El mismo día del atentado, todavía con el cadáver caliente, la viuda de Araluze reunió a sus hijos y les dijo: «Papá está en el cielo y nosotros somos cristianos y tenemos que perdonar. Perdonamos de todo corazón». Aguantaron hasta septiembre de 1977, cuando

tuvo una postura más clara frente al terrorismo etarra. De hecho, un año más tarde, el asesinato en Guernica del presidente de la Diputación de Vizcaya, Augusto Unceta, y sus dos escoltas fue condenado contundentemente por históricos del partido, uno de los cuales, Antón Ormazá, asistió al funeral de Unceta suscitando cierta controversia en filas *peñuistas*. Volviendo a octubre de 1976, en varios números de *Gertu* (boletín informativo de las juntas del PNV de Bilbao) de ese mes, se recogen las críticas de afiliados en contra de que su partido condenase a ETA. Una junta local escribía a la ejecutiva protestando porque consideraba que con las condenas estaban «haciendo el juego al Gobierno español» y se declaraban «la guerra a nosotros mismos». Por otro lado, los 27 alcaldes del Grupo de Vergara condenaban o repudiaban el atentado múltiple. Liderados por el empresario José Luis Elkoro—hijo del primer alcalde franquista de Elgueta—, eran un grupo de regidores afines al nacionalismo y enfrentados al grupo de la diputación. Su condena es un dato muy a tener en cuenta, ya que algunos de ellos, un año después, aparecerían vinculados a la Mesa de Alsasua, embrión de Herri Batasuna, formación en la que milita-

que nadie se preocupa hoy. Se habla de la vuelta de los presos de ETA, pero no de los vascos que se tuvieron que marchar por las amenazas de ETA, porque no eran nacionalistas o porque no querían pagar las extorsiones de la banda. No hay día en que los sucesores de ETA y Batasuna no nos hablen de la dispersión de los etarras encarcelados, de lo injusto que es para sus familiares y de la supuesta ilegalidad de su situación penitenciaria desde 1988. Sorprende que siendo así no hayan recurrido al Tribunal de Estrasburgo, como hicieron con la ilegalización de Batasuna o la *doctrina Parot*. Ninguno de ellos habla de la dispersión de los vascos a los que ETA obligó a marcharse de su tierra, algunos con más de ocho apellidos. La segunda consecuencia de aquel lunes negro de 1976 fue la culminación de la *campaña anti-alcaldes*, contra cargos públicos municipales y provinciales que ETA había anunciado en noviembre de 1975.

Esta *campaña* provocó la dimisión o exilio de cientos de cargos locales no identificados con el nacionalismo vasco, lo que privaría a la derecha vasca, organizada en Alianza Popular y UCD, de candidatos experimentados para las primeras elecciones generales, municipales y vascas. Los que hoy tanto se preocu-



Interior del coche en el que viajaba Juan María de Araluze, presidente de la Diputación de Guipúzcoa, cuando sufrió el atentado en 1976. EFE

do decidieron irse a Madrid por el ambiente irrespirable que sufrían. La misma serenidad puso el Gobierno de Adolfo Suárez, que evitó en todo momento tomar decisiones drásticas como el estado de excepción que pedía la ultraderecha. El brutal atentado fue condenado o rechazado por casi todos los partidos, algunos todavía sin legalizar, lo que reflejaba un inequívoco deseo de concordia para construir una democracia. Entre los testimonios de condena hubo dos que llamaron la atención. Por un lado, el del PNV, por un ligero matiz: en su comunicado «lamentaba» el quintuple homicidio frente a la firme condena—la primera a una acción de ETA—seis meses antes del asesinato del empresario Ángel Berazadi, ideológicamente próximo a los *jeltzales*.

Según fue avanzando la Transición, el PNV

El atentado fue condenado por casi todos los partidos, lo que reflejaba el deseo de construir una democracia

rían. Sin solución de continuidad, pasaron de ser ediles del Movimiento franquista a ser ediles del Movimiento Vasco de Liberación Nacional, sin problemas por sus adhesiones políticas públicas ni durante la dictadura de Franco ni durante la dictadura de ETA.

El asesinato de Juan María de Araluze tuvo dos grandes consecuencias. La primera fue el comienzo de un éxodo en el País Vasco del

pan porque Arnaldo Otegi sea candidato a *lehendakari* o protestaban por la ilegalización de Batasuna en 2003, nunca se preocuparon o protestaron por la ausencia en las urnas en numerosos municipios vascos de Alianza Popular, UCD o PP; por las amenazas del pistolero etarra. Cuarenta años después de aquel lunes negro, los que se pusieron de perfil contra ETA quieren pasar rápido de página e imponernos una memoria selectiva capaz de recordar la Guerra Civil o a Franco, pero incapaz de recordar el terrorismo que asesinó y obligó a muchos vascos a marcharse de su tierra desde 1976.

Gorka Angulo Altube es periodista. Desarrolla su labor profesional en el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.